

Las nacionalizaciones del gas en Reino Unido y Francia a través de la prensa especializada (1939-1949)¹

José Joaquín Luque García

Universidad de Málaga (España)

E-mail: joseluque@uma.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3139-6074>

<https://dx.doi.org/10.5209/chco.103689>

Recibido: 30 de junio de 2025 • Aceptado: 12 de noviembre de 2025

ES Resumen: Este artículo analiza la reacción de la industria del gas de Reino Unido y Francia a la nacionalización del servicio tras la Segunda Guerra Mundial a través de la prensa especializada del sector. La investigación tiene por objetivo estudiar comparativamente el papel que desempeñaron las principales publicaciones periódicas británica y francesa en la interpretación, difusión y debate público de las nacionalizaciones del gas en ambos países entre 1939 y 1949. Para ello, este estudio se apoya principalmente en el análisis crítico y cualitativo de las revistas *Gas Journal* y *Journal des Usines à Gaz*.

Palabras clave: prensa especializada; gas; nacionalización; Reino Unido, Francia.

ENG The Nationalization of Gas in the United Kingdom and France through the Trade Press (1939-1949)

Abstract: This article analyzes the reaction of the gas industry in the United Kingdom and France to the nationalization of the service after the Second World War, as reflected in the sector's specialized press. The research aims to comparatively study the role played by the main British and French periodicals in interpreting, disseminating, and fostering public debate on gas nationalization in both countries between 1939 and 1949. To this end, the study relies primarily on the critical and qualitative analysis of the *Gas Journal* and the *Journal des Usines à Gaz*.

Keywords: trade press; gas; nationalization; United Kingdom; France.

Sumario: Introducción. 1. La prensa especializada como fuente histórica. 1.1. Definición y características de la prensa especializada. 2. Nacionalización económica: Definición, teoría y fundamentos ideológicos. 3. Evolución de la industria del gas en Reino Unido y Francia. 4. Las nacionalizaciones del gas en Reino Unido y Francia y las reacciones del sector. 4.1. Reino Unido. 4.1.1. El informe de la *British Gas Federation* (1943). 4.1.2. El Informe Heyworth (1945). 4.2. Francia. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas.

¹ Este texto forma parte de los resultados de investigación del Programa de Doctorado en Estudios Avanzados en Humanidades de la Universidad de Málaga, desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación I+D+I "El gas en la Europa Latina: una perspectiva comparativa y global (1818-1945)", PID2020-112844GB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y Fondos FEDER. Asimismo, es fruto de la estancia realizada en 2024 en el Departamento de Histoire contemporaine de Sorbonne Université con la colaboración del Comité de Historia de la Electricidad y de la Energía y el apoyo de la Fundación del grupo EDF.

Cómo citar: Luque García, J. J. (2026). “Las nacionalizaciones del gas en Reino Unido y Francia a través de la prensa especializada (1939-1949)”. *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 48(1), 57-77.

Introducción

Las nacionalizaciones de la industria del gas en el Reino Unido y Francia representaron uno de los momentos clave en la historia energética europea durante el siglo XX. Estos procesos, ocurridos principalmente tras la Segunda Guerra Mundial, tuvieron como objetivo centralizar y optimizar la gestión del gas en manos del Estado, asegurando así la estabilidad energética, la reconstrucción económica y una distribución más equitativa del recurso. Las nacionalizaciones en ambos países surgieron en contextos diferentes, pero con objetivos convergentes. En el Reino Unido, la Ley de Nacionalización del Gas de 1948 constituyó una respuesta directa a la necesidad de reconstruir y modernizar infraestructuras esenciales devastadas por el conflicto, así como resolver la fragmentación y debilidad financiera de numerosas compañías locales. En Francia, la creación de *Gaz de France* en 1946 se enmarcó en un amplio programa nacionalizador del gobierno provisional, dirigido a controlar sectores estratégicos clave para asegurar la recuperación económica y a depurar de los servicios públicos a aquellos agentes que hubieran podido participar en la colaboración durante la ocupación (Colombo, 1961).

Las nacionalizaciones británica y francesa han sido ampliamente estudiadas por economistas, historiadores y juristas desde la década de 1950². Nuestro objetivo en este estudio no es abordar nuevamente el proceso de la nacionalización, sino estudiar comparativamente el papel que desempeñó la prensa especializada británica y francesa en el debate público de las nacionalizaciones del gas en ambos países entre 1939 y 1949, aproximadamente, coincidiendo estas fechas con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la culminación del proceso de nacionalización.

Para ello, este estudio se apoya principalmente en el análisis crítico y cualitativo de las dos principales cabeceras gasistas de ambos países: el *Gas Journal* [GJ] y el *Journal des Usines à Gaz* [JUG], complementado con otras fuentes hemerográficas y con bibliografía académica e informes técnicos de la época. La pregunta de investigación que orienta este estudio es: ¿cómo contribuyó la prensa especializada a configurar la opinión pública y sectorial sobre las nacionalizaciones del gas en Reino Unido y Francia durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial? En este sentido, nuestra hipótesis inicial defendía la utilización de esta plataforma por parte de los empresarios gasistas como un medio de unión y de defensa de sus intereses frente a la iniciativa ejecutiva. No obstante, tras el análisis de la documentación hemos observado tendencias divergentes en ambos países. Mientras que en el Reino Unido se desarrolló un debate amplio, articulado en la prensa especializada y reforzado por las organizaciones sectoriales, en Francia no se hallaron evidencias de una estrategia centralizada de oposición frente a la nacionalización desde el *Journal des Usines à Gaz*. En consecuencia, mientras nuestra hipótesis se confirma parcialmente en el caso británico, la ausencia de debate editorial explícito en Francia requiere una exploración adicional para comprender plenamente las razones políticas y culturales subyacentes a este silencio.

La relevancia del estudio radica en aportar una visión comparativa sobre el papel de los medios especializados en procesos de nacionalización económica, destacando su influencia tanto en la esfera profesional como en el ámbito público más amplio. El trabajo se articula en cuatro secciones principales. La primera presenta una aproximación metodológica a la prensa especializada como fuente para la investigación histórica. La segunda desarrolla, desde una perspectiva teórica, el concepto de nacionalización. La tercera examina sucintamente la evolución de la industria del gas en el Reino Unido y Francia, centrándose en su situación en los momentos previos

² Para los casos del gas son especialmente relevantes los estudios de Andrieu (1997), Beltran (1992), Beltran y Williot (1992; 2009), Colombo (1961), Cumbers (2019), Picard et al. (1985), Williams (1981), Williot (2009) y Wilson (1995).

a las nacionalizaciones. Finalmente, la cuarta sección analiza en profundidad la reacción del sector gasista en ambos países ante dichos procesos.

1. La prensa especializada como fuente histórica

La prensa especializada, científica, técnica o comercial, constituye una fuente primaria fundamental para el estudio de la industria desde mediados del siglo XIX. El desarrollo industrializador favoreció la aparición de publicaciones periódicas especializadas en sectores concretos. En el caso de la industria del gas, la primera publicación consolidada fue el *Journal of Gas Lighting*, fundado en Londres en 1849. Renombrada en 1917 como *Gas Journal*, la pionera revista se reafirmó como la más importante del sector británico del gas, prolongándose su redacción hasta la década de 1970.

Por su parte, Francia contó con un elevado número de publicaciones gasistas, como el *Journal de l'Éclairage au Gaz* en 1851 y *Le Gaz* en 1857 (Fernández-Paradas y Luque García, 2023). En 1877, la *Société Technique de la Industrie du Gaz* fundó el *Journal des Usines à Gaz* como un órgano de comunicación oficial. Gracias al respaldo financiero de dicha sociedad, la revista se consolidó como el principal referente del sector gasista francés, especialmente tras la desaparición del resto de publicaciones durante las dos guerras mundiales. En la actualidad, sigue vigente bajo la denominación de *Gaz de Aujourd'hui* (Fernández-Paradas et al., 2025).

No obstante, antes de proceder al aspecto central de esta investigación, consideramos oportuno definir sus características, relevancia, ventajas y limitaciones metodológicas.

1.1. Definición y características de la prensa especializada

La prensa, siguiendo la taxonomía propuesta por Aróstegui (2001), puede ser considerada como una fuente directa y testimonial que nos ofrece una información fundamental para el estudio histórico de los hechos y fenómenos a los que hace referencia.

La principal diferenciación entre prensa general o especializada radica en la dirección de cada título. La primera tiende a dirigirse al gran público, mientras que la segunda lo hace a un segmento restringido y trata temas específicos cuya comprensión requiere un elevado grado de conocimiento sobre el mismo. Por ejemplo, las revistas especializadas en gas fueron orientadas a ingenieros, directivos, científicos u otros expertos del sector. Habitualmente estas publicaciones incluyeron informes técnicos detallados, debates industriales, noticias corporativas, estadísticas o editoriales que reflejaron las preocupaciones e intereses propios de la industria. Por lo tanto, aunque referidos a la prensa general, autoras y autores como Sáiz (1996) o Hernández Ramos (2016) defienden esta fuente como un elemento de gran valor en el estudio de las mentalidades, ideologías o corrientes de opinión. En este sentido, es posible destacar el trabajo de Martykánová (2007) sobre los ingenieros de caminos en España o la obra colectiva dirigida por Bret et al. (2008). En nuestro estudio, el valor de la prensa especializada se ve reforzado en tanto que articula las corrientes de pensamiento de una comunidad definida y con unos intereses compartidos. Durante el proceso de la nacionalización del gas, las revistas técnicas del sector reflejan las posiciones de ingenieros y empresarios sobre las políticas en curso, permitiéndonos observar cómo los afectados por la nacionalización percibieron el fenómeno.

Así, entre las ventajas de esta fuente podemos destacar el visionado de la perspectiva interna del sector, con el consiguiente sesgo ideológico, que nos ofrece una amplia posibilidad de análisis sobre inclinaciones políticas, intereses económicos, acuerdos o disidencias entre sus miembros. Por otro lado, la inmediatez de las publicaciones periódicas a los hechos a los que se refiere nos ofrece una gran riqueza de detalle y su continuidad en el tiempo permite trazar la evolución diacrónica de los fundamentos que contiene.

En contraposición, la prensa presenta también importantes limitaciones como fuente histórica. Primeramente, aunque la inmediatez de la información constituye un valor añadido, esta puede derivar en un exceso de datos, a menudo contradictorios, que obliga a contrastarlos con otras fuentes para asegurar su fiabilidad. En segundo lugar, puede darse la situación opuesta: la omisión de ciertos aspectos que, por desinterés editorial, censura o sesgo ideológico, no eran

tratados o lo eran de manera parcial. Esta limitación obliga al investigador a recurrir a otras fuentes, tanto archivísticas como hemerográficas, para obtener una visión completa y equilibrada de los hechos. Por último, materialmente, la consulta de estas publicaciones es complejo, ya que se conservan de forma fragmentaria en distintos archivos y con grados variables de preservación.

2. Nacionalización económica: Definición, teoría y fundamentos ideológicos

La nacionalización, en términos generales, es el proceso por el cual el Estado asume la propiedad de empresas o sectores concretos. Estrictamente, podemos distinguir nacionalización de otros conceptos afines como estatización o socialización. Jeanneney (1954) trazó las siguientes diferenciaciones. Para el autor, la estatización implica la incorporación plena de una empresa al aparato estatal. Es decir, la entidad se fusiona jurídicamente con el Estado, ligándose su financiación a los presupuestos públicos. Por el contrario, la nacionalización difiere en que, aún bajo propiedad pública, la empresa mantiene una identidad jurídica separada del Estado, operando con mayor autonomía. Igualmente, nacionalización tampoco equivale a socialización, pues esta última implica la transferencia de la gestión y beneficios de la empresa directamente a la sociedad civil, por ejemplo, mediante cooperativas de trabajadores. En la nacionalización clásica, en cambio, la gestión recae en representantes y directivos dependientes o semindependientes del Estado. Finalmente, otra distinción radica en el porcentaje de propiedad nacionalizada, pudiendo encontrarse nacionalizaciones integrales, donde el Estado adquiere la totalidad de la propiedad y otras formas de propiedad mixta en la que el Estado adquiere una cuota mayoritaria, pero convive con capitalistas privados.

Aunque la intervención del Estado en la economía tiene antecedentes remotos, la nacionalización como concepto jurídico y política económica explícita se configuró en el siglo XIX. En ese momento, la doctrina liberal clásica imperante abogaba por la abstención del Estado en actividades económicas directas, limitándose a dotar de un marco jurídico a los actores privados. No obstante, desde mediados de la centuria, tanto desde sectores liberales, como desde el marxismo, se afianzaron corrientes de pensamiento que abogaron por el control gubernamental de sectores estratégicos de la nación.

Según Katzarov (1964), la nacionalización entra en conflicto con tres fundamentos del sistema clásico: la propiedad privada, la libertad irrestricta de empresa y la asignación de recursos a través del mercado. Al transferirse estas actividades al sector público, el Estado asume su planificación en función del interés general. Una de las justificaciones habituales de este proceso, particularmente extendida en el periodo objeto de este estudio, es la existencia de fallos de mercado provocados por monopolios naturales, que tienden a fijar precios excesivos o a situar al consumidor en una posición de desprotección. En Francia, tras la Liberación, emergió un discurso legitimador de la nacionalización impulsado por diversas fuerzas de la Resistencia que reclamaban la devolución de las industrias estratégicas a la nación. En esta línea, el programa del *Conseil National de la Résistance* (1944) exigía la transferencia a la colectividad de los grandes medios de producción que operaban en régimen de monopolio. Esta visión quedó institucionalizada en el preámbulo de la Constitución francesa del 27 de octubre de 1946, que reconocía la posibilidad de que las empresas consideradas como servicios públicos nacionales o como monopolios pudieran pasar a propiedad colectiva.

Además del componente monopolístico, la literatura económica ha identificado otras razones que han justificado históricamente los procesos de nacionalización. Estas incluyen la protección de recursos estratégicos frente a la sobreexplotación por parte de intereses privados, la necesidad de racionalizar sectores en crisis, y la garantía de inversión en servicios públicos que resultan poco atractivos para el capital privado. Un ejemplo paradigmático se encuentra en la nacionalización de los ferrocarriles en Francia en 1937 y la creación de la *Société Nationale des Chemins de fer Français*, cuyo objetivo principal fue evitar la quiebra de las empresas que operaban en el sector. Tras la Segunda Guerra Mundial, estas motivaciones se intensificaron en sectores clave, como el energético. En Reino Unido y Francia, se consolidó la idea de que la reconstrucción de la industria requería una planificación unificada estatalmente. Esta orientación buscaba evitar

duplicidades, optimizar los recursos y garantizar la universalidad de los servicios básicos (Colombo, 1961).

Por último, ideológica y políticamente, la nacionalización fue defendida por diversas corrientes que, si bien compartían ciertos objetivos, presentaban matices significativos en sus planteamientos. El socialismo concebía la nacionalización como una forma de subordinar la economía al bienestar colectivo y limitar el poder del capital privado. Sin embargo, existían posturas divergentes: los socialistas revolucionarios, como Jules Guesde, la rechazaban bajo un Estado burgués, reservándola para un Estado proletario. En cambio, reformistas como Jean Jaurès la consideraban posible dentro del régimen republicano, siempre que sirviera al interés general y fortaleciera lo público. En Francia, la idea de nacionalización también se articuló con el ideario del republicanismo radical, que desde la década de 1880 comenzó a abogar por el “retorno a la nación” de industrias estratégicas. Un episodio emblemático fue el conflicto de la mina de Anzin en 1884, durante el cual Georges Clemenceau planteó la expropiación de las minas en defensa de la República. En este contexto, la nacionalización adquiría una dimensión político-democrática y se presentaba como un instrumento opuesto al poder de los grupos financieros, percibidos como fuerzas antidemocráticas y contrarias al interés nacional. Esta retórica se reactivó con fuerza tras la Liberación, especialmente en el marco del programa de nacionalizaciones. En él, las élites industriales fueron acusadas de colaboracionismo, lo que facilitó un consenso transversal entre democristianos, socialistas y comunistas a favor de la recuperación de sectores estratégicos para la nación (Rosanvallon, 1981).

En Reino Unido la base ideológica se gestó desde mediados del siglo XIX. Desde la óptica liberal destacó sobremanera John Stuart Mill, quien identificó situaciones en las que la libre competencia, fundamento básico del *laissez faire*, no garantizaba el perfecto funcionamiento del mercado. Entre ellas, se encontraban aquellas actividades que por sus barreras de entrada y otras razones estructurales acababan deviniendo en monopolios, llamados naturales, como, por ejemplo, las industrias de gas, agua, telecomunicaciones o ferrocarril en las que las empresas obtenían la facultad de fijar precios excesivos y condiciones abusivas en detrimento de los consumidores. Ante estos fallos del mercado, la intervención estatal quedaba justificada, ya fuera mediante la regulación legislativa, la nacionalización, o en su caso, la municipalización del servicio (Daunton, 2008; Mosca, 2008). Así, en este contexto, antes de la plena irrupción del socialismo municipal en el último tercio de la centuria, ya en 1843 se encontraron casos de intervención pública con la municipalización del gas en Mánchester o la del agua en Liverpool en 1847 (Millward, 2005). Asimismo, en el plano nacional destacó la Ley de Ferrocarriles de Gladstone que contemplaba el derecho a la nacionalización del servicio, o aún más, la nacionalización del servicio de telegrafía en 1870 (Johnson, 2010; Fari, 2015).

Posteriormente, desde las postrimerías del siglo XIX, la Sociedad Fabiana y el Partido Laborista abogaron por una estrategia de nacionalización gradual de los servicios públicos. Sidney y Beatrice Webb, fundadores del fabianismo, defendían la introducción progresiva de ideas socialistas en el aparato estatal sin recurrir a la revolución y en 1918 reclamaron la nacionalización de sectores clave como el transporte, el carbón y el hierro. No obstante, autores como Milward (1997), sostienen que el programa de nacionalizaciones británico de la postguerra no debe entenderse como una mera aplicación doctrinaria del socialismo, sino como una respuesta pragmática a problemas estructurales. Según esta perspectiva, las industrias seleccionadas para la nacionalización, caracterizadas por condiciones monopolísticas, presentaban serias dificultades para funcionar eficientemente bajo gestión privada, especialmente en el contexto de la posguerra y la reconstrucción nacional. A diferencia de Francia, donde las nacionalizaciones, además del componente económico, se vincularon a la lógica de la depuración, en Reino Unido, entroncando con los planteamientos liberales expuestos más arriba, las nacionalizaciones se concibieron principalmente como parte de un plan económico orientado a la racionalización y modernización de los servicios esenciales. No obstante, también existen interpretaciones, como la de Wilson (1995), que subrayan el peso del pensamiento e ideología socialista en la acción del programa laborista.

La llegada al gobierno del laborista Clement Attlee, en 1945, consolidó la idea de que las industrias básicas debían estar al servicio del interés público bajo control estatal. Aunque el Partido Conservador se opuso a estas medidas durante los debates parlamentarios, sus gobiernos posteriores mantuvieron en gran medida las políticas implementadas. De este modo, se formalizó un amplio consenso económico que caracterizó la política británica hasta la década de 1970, en el marco del llamado consenso de posguerra, en el que la intervención del Estado en la economía fue aceptada como herramienta legítima para garantizar estabilidad, crecimiento y bienestar social (Tōyama, 1977; Kelf-Cohen, 1973).

3. Evolución de la industria del gas en Reino Unido y Francia

La situación de la industria gasista a mediados de la década de 1940, aunque profundamente afectada por los daños materiales del periodo bélico, era el resultado de una evolución iniciada a comienzos del siglo XIX y condicionada por contextos nacionales distintos. En Gran Bretaña, la industria del gas se desarrolló con la fundación en 1812 de la *Gas Light and Coke Company* de Londres. La riqueza mineral de Reino Unido favoreció una pronta proliferación de fábricas de gas circunscritas cada una de ellas a un núcleo urbano determinado, lo que incidió en la atomización del esquema gasista (Russel, 2018). El régimen de propiedad de las instalaciones de gas fue, inicialmente, exclusivamente privado. Las empresas operaban mediante concesiones otorgadas por los municipios, que daban el derecho de explotación en régimen de monopolio por periodos comprendidos entre 30 y 50 años. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, este modelo fue cuestionado por numerosos ayuntamientos. En el marco del socialismo municipal, muchas localidades optaron por asumir directamente la propiedad y gestión de los servicios de gas, pasando de 13 explotaciones en 1844-1867 a 166 en 1887 (Magaldi, 2010). Esta tendencia respondía tanto a críticas hacia los abusos o ineficiencias del modelo concesional como a una creciente concepción del gas como un servicio que debía regirse por el interés público (Matés Barco, 2017).

Hasta 1880, el gas mantuvo una posición privilegiada gracias a la ausencia de una competencia significativa en el ámbito de la iluminación. Sin embargo, la irrupción de la electricidad y su rápido desarrollo obligaron a la industria gasista a modernizar su tecnología para mejorar la eficiencia y diversificar sus aplicaciones. Con el nuevo siglo, a pesar de la competencia, el gas se mantuvo como la fuente energética de referencia. Esta hegemonía se sostuvo hasta 1910, momento en el que el gas alcanzó su máxima expansión geográfica (Martínez-López y Mirás Araujo, 2024).

Sin embargo, la mejora constante en las tecnologías de producción y transporte de la electricidad, junto con la crisis del carbón provocada por la Primera Guerra Mundial, asestaron un duro golpe a la industria del gas, que perdió su posición dominante en la iluminación pública. Desde ese momento, el sector centró sus esfuerzos en potenciar los usos caloríferos que ya venía desarrollando, especialmente en calefacción y cocina. Estas estrategias permitieron al gas mantener una presencia significativa en el mercado durante el periodo de entreguerras. No obstante, en comparación con el rápido crecimiento de la industria eléctrica, comenzó a percibirse como un sector estancado (Giuntini y Williot, 2023; Fernández-Paradas *et al.*, 2024).

La fragmentación empresarial, común en las primeras fases del desarrollo de la industria gasista en todos los países, fue particularmente prolongada en el caso británico. Mientras que en otros contextos nacionales ya se observaba una clara tendencia hacia la concentración del sector, en el Reino Unido persistía un modelo altamente atomizado. En 1937, el sector gasista británico seguía caracterizándose por una explotación del servicio fundamentalmente local, heredera directa de su esquema originario del siglo XIX, sin una estructura centralizada de gestión (Colombo, 1961). En esa fecha, Reino Unido contaba con 1.079 empresas de gas que pertenecían a 788 propietarios diferentes. De ellas, 496 eran independientes y sumaban el 55,9 % del total del volumen de gas comercializado. Otras 310 eran controladas por 19 corporaciones o holdings, que suministraban el 9,5 %. 268 eran de propiedad municipal, siendo responsables del 33,6 % del total, y finalmente 5 empresas actuaban como *Joint Local Authorities*, fórmula utilizada para la copropiedad de distintos grupos de autoridades locales cercanos geográficamente y que

suministraban un 1 % (GJ, 05/01/1944). Además, la facturación entre las empresas era muy desigual, en relación con el grado de urbanización y economías de escala que pudieran disfrutar en su lugar de actuación. Así, por ejemplo, en 1936, una sola empresa, la *Gas Light and Coke Company*, lideraba la actividad con 240 millones de termias, mientras que 425 empresas suministraban menos de 0,5 millones de termias al año (Williams, 1981: 69-70).

La atomización gasista en Reino Unido fue una respuesta inevitable a las limitaciones técnicas para el transporte del gas a media y larga distancia. Esta circunstancia técnica obligada, sin embargo, se vio agravada por la falta de interés, tanto estatal como empresarial, en avanzar hacia una homogeneización del servicio. Como resultado, a lo largo del país se registraban notables disparidades en la calidad, estándares y precio del suministro. En contraste, tras la consolidación de su papel económico durante la Primera Guerra Mundial, el Estado británico intervino de forma decidida en la industria eléctrica, emprendiendo importantes reformas que sentaron las bases para una reestructuración profunda del sector con la formación de un órgano público central: la *Central Electricity Board*. Entre sus logros más significativos destacan la articulación de una red nacional de distribución, la estandarización del servicio y la mejora de la eficiencia, lo que permitió una notable expansión del consumo de electricidad, así como el acentuamiento del gas como una rama industrial con poco dinamismo (Hannan, 1979).

Finalmente, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45), el gobierno británico intervino decididamente todos los sectores energéticos bajo la economía de guerra. El gas fue declarado industria esencial; se racionó el consumo y se centralizó la distribución de carbón para asegurar su producción (Fernández-Paradas *et al.* 2023, 2025). Esta experiencia reforzó la idea de que una planificación estatal podría ser más conveniente en el escenario posbélico que la multiplicidad y desorganización sectorial. En la inmediata postguerra, el Partido Laborista esgrimió el programa de nacionalizaciones como uno de sus principales puntos en política económica. A ojos de los socialistas, la importancia del sector y la profundidad de la reforma que necesitaba quedaba fuera de la capacidad privada de favorecer el bien común, habida cuenta de sus intereses individuales (Millward, 1997).

En Francia, el desarrollo del gas a escala industrial se inició en 1818. Desde sus comienzos, la actividad gasista estuvo estrechamente regulada por las autoridades públicas. Las primeras medidas legislativas favorecieron la concepción del gas como un monopolio natural. El caso de París resulta especialmente ilustrativo: en 1846 se inició un proceso de concentración empresarial que culminó en 1855 con la fusión de las seis compañías operativas y la creación de la *Compagnie Parisienne de Gaz* (Williot, 1999). A partir de mediados del siglo XIX, la industria gasista francesa experimentó una rápida expansión geográfica y un proceso de concentración empresarial favorecido por el marco legal de las concesiones exclusivas. Con las grandes ciudades iluminadas, las compañías existentes buscaron nuevos mercados en municipios de menor tamaño, formando los primeros grupos gasistas interurbanos. En la práctica estos supusieron un estado embrionario de integración regional en sentido económico, sin que ello supusiera la creación de una red de suministro supramunicipal o regional (Williot, 2005; 2009).

Respecto a la propiedad, en Francia, el debate sobre el socialismo municipal tuvo un menor alcance que en los países de su entorno. Las leyes francesas eran restrictivas: antes de 1917 no existía una base jurídica clara para que un ayuntamiento explotara por sí mismo un servicio industrial. Tan solo 47 ciudades lograron instaurar servicios de gas públicos antes de 1946, cubriendo apenas el 7 % del gas vendido en el país, y siendo casos destacados Tourcoing, Grenoble o Burdeos (Cardoso de Matos *et al.*, 2024; Fernandez, 2021). El resto correspondía a compañías privadas. En total, existían 724 fábricas de gas operadas por 251 empresas diferentes, de las cuales 209 seguían siendo totalmente privadas (Beltran, 1992).

Acabada la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras fue poco favorable para el sector. Si bien los usos caloríferos se expandieron moderadamente, la electricidad se impuso como agente lumínico. De hecho, el consumo de gas se estancó en la década de 1930, pasando de 40 m³ por habitante en 1925 a 42 m³ en 1938. En comparación con otras grandes naciones industriales, Francia se encontraba muy rezagada. En ese mismo año, Suiza alcanzaba un consumo de 59 m³ por habitante, Alemania 174 m³ y Gran Bretaña 222 m³ (Beltran y Williot, 1992).

Por otro lado, es importante destacar el impacto de la electricidad en el sector gasista. A diferencia de Gran Bretaña, donde las compañías de gas y electricidad solían ser entidades separadas, en Francia fueron las propias empresas gasistas las que diversificaron su actividad al incorporar también la producción y distribución de electricidad (Fernandez, 2021). De hecho, como resultado de este proceso, en el momento de la nacionalización, solo ocho compañías se dedicaban exclusivamente al suministro de gas, lo que sirvió de argumento para, en 1946, nacionalizar conjuntamente, bajo la misma ley, ambos servicios (Beltran y Williot, 1992).

Finalmente, con la Segunda Guerra Mundial, el Estado francés incrementó notablemente su intervención en la industria del gas. En septiembre de 1939 se bloquearon los precios de venta y se autorizó la extensión de la jornada laboral hasta 60 horas semanales. Esta intervención se profundizó posteriormente, tras el armisticio, con la Ley del 16 de agosto de 1940, mediante la cual se reorganizó administrativamente el Ministerio de la Producción Industrial y se estableció la creación de comités específicos por rama industrial (Williot, 2009; Fernández-Paradas *et al.*, 2023). Durante la guerra, el consumo relativo de gas aumentó, pero no por mejoras en su producción, sino por el declive de sus competidores. De hecho, tras 1944, aunque considerado como una riqueza nacional, tuvo una consideración marginal respecto al carbón, petróleo o electricidad (Fernandez, 2017).

4. Las nacionalizaciones del gas en Reino Unido y Francia y las reacciones del sector

4.1. Reino Unido

La nacionalización del gas en Reino Unido se vio materializada en 1948. A diferencia de otros sectores, como el del carbón, nacionalizado en 1946, o el de los ferrocarriles, en 1947, la transferencia del sector al Estado no ocupó un intenso debate en la prensa generalista. No obstante, esto no significa que la medida careciera de discusión o resistencia entre los agentes afectados. De hecho, la idea de la nacionalización, aun cuando era contemplada como una remota posibilidad, generó amplios debates durante toda la década de 1940 en Reino Unido.

A continuación, analizaremos el debate interno de la industria del gas frente a la inminente nacionalización del sector entre 1939 y 1949, un periodo delimitado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la entrada en vigor del *Gas Act*. Para ello, nos apoyaremos en el *Gas Journal*, especialmente en sus editoriales, cartas al editor y artículos destacados, así como en la bibliografía especializada. En primer lugar, examinaremos los antecedentes a la victoria laborista de 1945, un periodo en el que ya se planteaban propuestas de reorganización impulsadas por el propio sector gasista. Tras ello, una segunda etapa se inició con el cambio de gobierno y su decidida iniciativa. Por último, se analizará la reacción del sector ante el anuncio e implementación de la ley, así como las tensiones, adaptaciones y discursos que acompañaron este proceso.

Durante la década de 1930 el relativo estancamiento del sector evidenció la necesidad de una mayor coordinación entre las compañías para poder homogeneizar el servicio en toda la nación, además de actuar como un frente único ante la competencia, acreedores y proveedores. En este contexto se fundó en 1934 la *British Gas Federation [BGF]*, asociación bajo la cual se reunieron las importantes *Institution of Gas Engineers*, *National Gas Council*, la *British Commercial Gas Association* y la *Society of British Gas Industries*.

En efecto, la creación de una federación sectorial en 1934 no suponía una novedad significativa en el panorama británico. Las entidades que la integraron habían marcado los antecedentes de cooperación dentro del mundo gasista. La *Institution of Gas Engineers* nació en 1888 y su fin fue el de promocionar la difusión científica-técnica entre sus miembros y actuar como un órgano de defensa frente a las autoridades (GJ, 04/11/1902). La *Society of British Gas Industries* fue formada en 1905 por fabricantes de materiales y equipos de gas (GJ, 28/11/1905). La *British Commercial Gas Association* se constituyó en 1912 buscando aunar esfuerzos en torno a la expansión de la industria a través de la publicidad, educación o la innovación técnica (GJ, 20/02/1912).

Cada institución representaba un segmento específico dentro del sector gasista. La *Institution of Gas Engineers* restringía su membresía exclusivamente a ingenieros, excluyendo a otros perfiles profesionales, como aquellos vinculados a la actividad comercial. Estos últimos encontraban cabida en la *British Commercial Gas Association*, si bien esta restringió el acceso a las empresas públicas. Por su parte, la *Society of British Gas Industries* no estaba integrada por compañías gasistas, sino por fabricantes de equipamiento, llegando a percibirse como una entidad rival, por parte de las gasistas (GJ, 27/07/1916).

Durante la Primera Guerra Mundial, las dificultades experimentadas por el sector impulsaron la creación de un organismo común. En 1916 se fundó el *National Gas Council*, concebido como una instancia de representación conjunta de los intereses administrativos, financieros, técnicos y comerciales, segmentados hasta entonces (GJ, 10/10/1916). En 1919, el consejo original fue reestructurado. Aunque las asociaciones preexistentes colaboraron en su formación, el nuevo *Gas Council* se configuró en torno a la representación de las empresas de gas, municipales y privadas, llegando a agrupar en 1930 aproximadamente el 80 % del gas comercializado en el Reino Unido (GJ, 25/02/1919; Williams, 1981).

De esta forma, en 1934 la BGF, pretendió profundizar en la integración limitada que se había llevado a cabo en las décadas anteriores. Se trataba, al menos en el plano intencional, de la configuración de un marco de actuación y coordinación amplio que representara a la totalidad del sector. Pese a ello, los intereses privativos de las empresas imposibilitaron la creación de un órgano con capacidad impositiva sobre sus integrantes, por lo que la coordinación real entre organizaciones o empresas continuó siendo limitada. Por ejemplo, los propietarios de pequeñas unidades de producción se negaron a la creación de redes regionales de suministro en tanto que podía significar el cierre de las plantas poco eficientes. Asimismo, los ayuntamientos que gestionaban su propio servicio recelaron de la posibilidad de cederlo a una entidad privada (Williams, 1981).

En vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, un informe elaborado por el grupo independiente *Political and Economic Planning* (1939) advertía que el estancamiento de la industria gasista, unido a su elevado valor estratégico y a la manifiesta intención socializadora del Partido Laborista, podía allanar el camino hacia una intervención gubernamental en el medio plazo. Como alternativa a una nacionalización directa, el informe propuso la creación de una autoridad central del gas que promoviera la integración regional de las empresas. El objetivo final consistía en elaborar un plan de racionalización del servicio basado en la creación de grandes áreas integradas de suministro y producción (Fernández-Paradas y Sudrià, 2018).

Iniciado el conflicto, la presión ejercida sobre los recursos energéticos puso de relieve la necesidad de optimizar el servicio gasista. En este contexto, el *Gas Journal* se consolidó como un foro privilegiado de debate sectorial, en el que se abordaba con creciente urgencia la necesidad de una profunda reestructuración de la industria. Además de sus editoriales, la revista comenzó a incluir actas de las asambleas de las asociaciones británicas del gas, artículos especializados y cartas al editor, que constituyen una valiosa fuente para conocer las principales corrientes de opinión, los consensos alcanzados y las disidencias existentes entre los distintos actores.

Los especialistas coincidían en la conveniencia de homogeneizar los estándares a nivel nacional, al tiempo que se planteaba la necesidad de centralizar ciertos aspectos clave. Un ejemplo ilustrativo es el de W.T. Hallan, controlador de la distribución en la *Bedford Gas Company*, quien, en 1940, criticó abiertamente la inoperancia de la BGF, comparando su ineficacia con la de la extinta Sociedad de Naciones, debido a su falta de capacidad ejecutiva. Hallan abogaba por la cesión de competencias a una autoridad superior que permitiera unificar criterios técnicos y comerciales a escala nacional. En línea con las tesis defendidas por el *Political and Economic Planning*, advertía que la incapacidad de la industria para emprender su autorreforma podría desembocar en una nacionalización forzosa (GJ, 19/07/1940).

En este clima de creciente debate sobre el futuro de la industria gasista, David Milne-Watson, gobernador de la *Gas Light & Coke Company* y presidente del *National Gas Council* pronunció en octubre de 1941 un discurso en el que abogó abiertamente por una intervención gubernamental que se concretase en la creación de un Ministerio de Combustible y Energía. Su intervención no solo evidenció la concienciación por parte de los sectores dirigentes de la industria sobre la

necesidad de reforma, sino también la creciente disposición a colaborar con el Estado en la planificación del sector energético. En la misma línea, una editorial del *Gas Journal* publicada el 5 de noviembre de 1941 respaldaba los planteamientos de Milne-Watson, afirmando que estos reflejaban el sentir general de la industria. Este posicionamiento marcaba un giro significativo en la actitud tradicionalmente reticente del sector frente a la intervención estatal, y evidenciaba una creciente asimilación de la idea de colaboración público-privada como vía para lograr una modernización eficaz del sistema gasista (GJ, 21/01/1942).

4.1.1. El informe de la *British Gas Federation* (1943)

La BGF no fue ajena al debate y propuso la creación de un comité, presidido por el influyente David Milne-Watson con el objetivo de “recopilar y organizar información relevante, y considerar las medidas que debe tomar la Industria para establecerse en una base que le permita afrontar mejor las condiciones cambiantes del futuro” (GJ, 03/11/1943: 555). Para ello se crearon diferentes comisiones, siendo una de las más importantes la encargada de la redacción final del informe y que recayó en la dirección de A.E. Sylvester, director general de la *Gas Light & Coke Company*, contando además con la participación de otros destacados directivos como A.E. Evans, director general de la *South Metropolitan Gas Company*, segunda compañía en volumen de negocio en Reino Unido (GJ, 19/11/1941).

El documento fue publicado en octubre de 1943. En él se abogaba por la promoción de un proceso de integración geográfica de las empresas a nivel regional, mediante fusiones de compañías locales, tanto públicas como privadas, con el fin de constituir entidades suprarregionales, coordinadas entre sí por un órgano central compuesto por representantes del sector, sin intervención directa del Estado. El informe se estructuraba en torno a dos objetivos fundamentales. Desde una perspectiva económica, la regionalización permitiría la conformación de redes de suministro de escala intermedia que contribuirían a reducir los costes de producción. Esta reducción se lograría, por un lado, mediante el cierre de plantas ineficientes y, por otro, a través de la unificación de las estrategias comerciales. Estas, a nivel nacional, estarían subordinadas a una nueva institución: la *British Gas Association*. La financiación de esta estructura recaería en las propias empresas del sector, mientras que su responsabilidad principal sería la articulación de una base común, comercial y técnica, para todos los distritos. En previsión de posibles conflictos entre la entidad central y las compañías locales, se propuso la creación de un tribunal permanente con capacidad para emitir decisiones de cumplimiento obligatorio (GJ, 10/11/1943).

Por otro lado, desde una perspectiva política, el plan de la BGF representó manifiestamente una alternativa a la nacionalización. Conscientes de la imperiosidad de una reforma, frente a la expropiación y transferencia de las empresas al gobierno defendida por la oposición laborista, la federación propuso una reorganización voluntaria liderada por las propias compañías y autoridades locales. Según el informe, el papel del Estado debía circunscribirse a la creación de un marco legislativo flexible y adecuado que facilitara el proceso de reestructuración del sector (GJ, 10/11/1943).

A pesar de las propuestas y profundidad del informe de 1943, y aunque la BGF agrupaba a la mayoría de las empresas del sector, su recepción fue controvertida y careció de una base sólida para su implementación. La integración bajo una entidad superior generó un rechazo amplio, debido a la persistencia de intereses particulares de cada empresa sobre una visión colectiva, especialmente entre las empresas de menor tamaño, cuya disidencia fue transversal y generalizada. No obstante, fueron las compañías municipalizadas las que articularon la respuesta más contundente, defendiendo con firmeza su autonomía de gestión frente a cualquier intento de centralización sectorial.

La *Association of Municipal Corporations*, constituida en 1873 y conformada por empresas municipalizadas encargadas de la provisión de diversos servicios públicos, y la *Association of Smaller Municipal Gas Undertakings*, fundada en 1943 con el propósito explícito de representar los intereses de las pequeñas compañías municipales de gas ante la previsible reorganización del sector, desarrollaron una actuación paralela en 1944. Ambas entidades manifestaron su

oposición al plan de la *BGF* y elaboraron informes en los que se propusieron alternativas de reorganización divergentes respecto a dicho proyecto (GJ, 26/01/1944).

La primera de estas asociaciones denunció la escasa representatividad que las empresas municipalizadas habían tenido en el comité de la *BGF*. Señaló que, de los quince miembros que lo componían, solo dos estaban vinculados a autoridades locales. Las autoridades locales consideraban inaceptable la creación de un tribunal con competencias ejecutivas, al entender que dicho órgano podía convertirse en un instrumento que actuara como una vía para la absorción de las empresas municipalizadas por parte de holdings, cuya lógica de concentración no respondía a criterios de integración territorial ni funcional, sino estrictamente económicos. Desde esta perspectiva, la constitución de conglomerados privados suponía un riesgo evidente, pues su tendencia a adquirir únicamente aquellas empresas rentables, sin atender a su localización geográfica, contribuía no a una reorganización racional del sector, sino a la perpetuación de su fragmentación estructural.

Frente a la defensa de los intereses privados promovida por la *BGF*, ambas asociaciones, aunque igualmente opuestas a un proceso de estatalización, abogaron por una reorganización de la industria gasista basada en criterios de interés social. En concreto, propusieron avanzar hacia una municipalización integral del sector, que permitiera garantizar un control público más cercano y eficaz sobre el suministro (GJ, 05/01/1944; 20/09/1944).

La falta de consenso del sector, evidenciada por la diversidad de propuestas y la incapacidad de articular una posición común ante el Estado, favoreció la intervención gubernamental. En este contexto, cobra especial relevancia la creación en 1942 del Ministerio de Combustible y Energía, institución que reflejó el creciente interés del gobierno británico por centralizar y racionalizar la gestión de los recursos energéticos. Esta nueva cartera ministerial no solo coordinó la producción y distribución de carbón, electricidad, gas y petróleo, sino que también se convirtió en el marco institucional desde el cual el gobierno de coalición liderado por Churchill impulsó en 1944 su propia investigación sobre el futuro de la industria del gas.

4.1.2. *El Informe Heyworth (1945)*

Desde hace tiempo, empresarios del gas pedían mayor apoyo estatal para modernizar la industria, sin reclamar una intervención directa en su gestión. Buscaban respaldo institucional ante las crecientes dificultades técnicas y económicas. Consideraban estar en desventaja frente a sectores como la electricidad o el carbón, que ya contaban con estructuras de interlocución consolidadas y mayor atención gubernamental.

En este contexto, en junio de 1944, el ministro de Combustible y Energía, Gwilym Lloyd George ordenó la constitución de un comité de investigación encargado de “revisar la estructura y organización de la industria del gas, aconsejar qué cambios son necesarios con el fin de desarrollar y abaratar el suministro de gas para todo tipo de consumidores y formular las recomendaciones pertinentes” (GJ, 07/06/1944: 723).

El comité fue presidido por Geoffrey Heyworth, un destacado empresario que aportó un perfil tecnocrático a la iniciativa gubernamental. El anuncio de su creación fue recibido con una mezcla de expectativa y recelo. Si bien la decisión del gobierno podía interpretarse como un reconocimiento a la importancia estratégica de la industria, que hasta entonces se sentía relegada, también suscitó preocupación ante la posibilidad de que el Ejecutivo optara por una intervención directa en la estructura del sector.

La redacción del informe culminó en noviembre de 1945. Las conclusiones del documento se alineaban, en términos generales, con las propuestas previamente formuladas por la *BGF*, en lo que respecta a la necesidad de una regionalización y racionalización del sector. No obstante, el informe introducía una diferencia sustancial respecto al planteamiento de la federación gasista, al recomendar una intervención directa del Estado. Mientras la federación abogaba por un proceso de integración empresarial de carácter voluntario, el comité proponía la adquisición obligatoria, por parte del gobierno, de la totalidad de las empresas de gas, tanto privadas como municipales. Este proceso se llevaría a cabo mediante un sistema de expropiación con compensación

económica, y supondría la transferencia de los activos a nuevas entidades públicas regionales. Cada una de estas juntas regionales estaría compuesta por seis directores designados por el ministro de Combustible y Energía. De este modo, el informe delineaba una estrategia de reestructuración del sector que, si bien mantenía ciertos elementos del modelo empresarial previo, introducía una arquitectura institucional claramente orientada hacia el control público del suministro gasista. El gobierno laborista surgido de las elecciones de julio de 1945 con la promesa de nacionalizar las industrias estratégicas del país encontró en el informe Heyworth, convocado por la anterior administración, un elemento de legitimación de sus intenciones (GJ, 12/12/1945).

Aunque la respuesta oficial del *Gas Journal*, expresada a través de sus editoriales, fue ambigua y evitó un tono abiertamente confrontativo, tanto las actas de las asociaciones incluidas, como las cartas dirigidas al editor, evidenciaron un grado significativo de descontento frente a las propuestas de nacionalización. Varios directivos trataron de refutar la narrativa según la cual la nacionalización representaría una solución definitiva a los problemas estructurales del sector. En este marco, comenzaron a elaborarse propuestas alternativas de reorganización del sistema gasista, que incluían distintos grados de intervención estatal, pero que preservaban, al menos en parte, la propiedad privada. Un ejemplo destacado de esta línea de pensamiento fue la propuesta formulada por G. M. Gill, ingeniero jefe de la *South Metropolitan Gas Company*, publicada en diciembre de 1946, que delineaba una posible vía de integración sin recurrir plenamente a la estatización del sector (GJ, 14/03/1946; 06/12/1946).

Desde una perspectiva corporativa, la industria respondió organizativamente a los desafíos del proceso de nacionalización. En noviembre de 1946, el *National Gas Council* y la *British Commercial Gas Association* se fusionaron para formar el *British Gas Council*. Esta nueva entidad se concibió como un órgano de representación unificado, capaz de coordinar la respuesta del sector privado frente a la inminente intervención estatal. Al frente del nuevo consejo fue designado Sylvester (GJ, 25/12/1946). En noviembre de 1946 los representantes de la nueva asociación se reunieron con el ministro de Combustible y Energía Emanuel Shinwell solicitando un aplazamiento en los planes de nacionalización. La negativa de Shinwell a la solicitud fue contestada con resignación, afirmando el *British Gas Council* que, aún en desacuerdo con el plan gubernamental, colaboraría de ser necesario con el ministerio a fin de salvaguardar el interés general (GJ, 03/04/1946; 25/12/1946).

Algunos miembros destacados de la industria consideraron la actitud de la dirección del *British Gas Council* excesivamente conciliadora y sumisa, proclamando la necesidad de adoptar una postura abiertamente crítica a la nacionalización. Entre los más destacados, Hyde C. Burton, presidente de la *Malta and Mediterranean Gas Company*, y G. Murray Burton, secretario de la *East Cowes Gas Company*, abogaron por una estrategia de oposición firme. En frecuentes cartas publicadas en el *Gas Journal* expresaron su defensa de una línea dura de actuación, reclamando la movilización de todos los recursos disponibles dentro del marco constitucional para resistir cualquier intento de socialización del sector. Señalaron la existencia de un grupo significativo de directores que compartían su desacuerdo con la postura adoptada por el organismo representativo e instaba al Consejo a convocar una reunión urgente para discutir una respuesta colectiva. Al mismo tiempo, apelaron al *Gas Journal* para que habilitara un espacio en sus páginas que permitiera sumar apoyos a su demanda de acción concertada (GJ, 19/09/1945; 20/02/1946; 05/01/1946).

Ante las presiones internas, el *British Gas Council* convocó, en julio de 1946, más de una decena de reuniones con el objetivo de establecer una postura representativa entre sus miembros. El Consejo estaba integrado por 890 empresas, de las cuales un 73 % (652) eran privadas y un 27 % (238) municipales. De ellas, participaron activamente en las reuniones 409 empresas privadas y 157 municipales, lo que representa aproximadamente dos tercios del total de entidades afiliadas. Durante estas sesiones se sometieron a votación dos resoluciones clave. La primera consistía en expresar formalmente la oposición del sector a la nacionalización de la industria del gas; la segunda, en establecer una disposición de cooperación con el gobierno en caso de que dicha nacionalización resultara inevitable. Los resultados fueron significativos. Un 81 % de las empresas participantes manifestó su rechazo al proceso de estatización. Sin embargo, la segunda resolución reveló una actitud pragmática por parte del sector: un 92 % de las compañías votantes

declaró estar dispuesta a colaborar con el Ministerio en caso de que la nacionalización fuera inevitable. Esta elevada aceptación mostró que las posiciones de confrontación total, como las previamente expresadas por algunos miembros del sector, representaban una minoría dentro del conjunto de la industria (GJ, 28/08/1946).

Por el contrario, la actitud de Sylvester o de Milne-Watson fue la imperante. En 1947, el proceso de nacionalización de la industria del carbón ya se había completado, mientras que el de la electricidad se encontraba en una fase avanzada. En este contexto, el traspaso de la industria del gas a la propiedad pública era percibido como un desenlace inevitable. Ante tal perspectiva, una estrategia de confrontación abierta con el Ministerio de Combustible y Energía podía resultar contraproducente. Por el contrario, la colaboración ofrecía a los representantes del sector privado la posibilidad de influir en el diseño del nuevo modelo organizativo, negociar condiciones indemnizatorias favorables, asegurar la continuidad de sus trayectorias profesionales y, en algunos casos, integrarse en la estructura administrativa del nuevo régimen público (Williams, 1981).

En junio de 1947, el Ministerio de Combustible y Energía invitó formalmente al *British Gas Council* a participar en la creación de un comité consultivo durante el proceso de nacionalización. Esta instancia ofrecía a la industria una oportunidad de interlocución directa con el Estado en un momento decisivo del proceso de reforma. Entre los temas más relevantes abordados en el marco de este comité destacaron la cuestión de la compensación económica, la delimitación de las futuras regiones administrativas del gas, así como la conveniencia y funciones de una posible autoridad central encargada de coordinar dichas regiones bajo el nuevo esquema público (GJ, 23/07/1947).

Aceptada la invitación, el *British Gas Council* presentó su propia propuesta de reorganización de la industria gasista, la cual se sumaba a las ya formuladas por la BGF y el Comité Heyworth. El planteamiento contemplaba una estructura organizada en tres niveles jerárquicos. En el primer nivel se situaría el *National Gas Board*, concebido como el órgano rector a escala nacional, encargado de las finanzas del sector, la definición de políticas generales y la resolución de cuestiones de alcance estratégico. En un segundo nivel, se propuso la creación de trece Consejos Regionales del Gas, responsables de la planificación de las operaciones a nivel supramunicipal. Por último, el tercer nivel estaría integrado por Grupos de Gestión Distrital, encargados de la administración directa de una o varias instalaciones dentro de cada región, con funciones operativas más concretas. El aspecto más innovador de esta propuesta, y el que la diferenciaba significativamente del informe Heyworth, fue la recomendación de establecer un organismo central autónomo, separado orgánicamente del ministerio. Este ente estaría compuesto por especialistas y altos cargos con experiencia en la industria gasista (GJ, 30/07/1947).

Algunas de las propuestas del *British Gas Council* se incorporaron al proyecto de ley para la nacionalización de la industria del gas, presentado en enero de 1948. En este se aceptó la formación de una estructura descentralizada, característica común a todas las propuestas elaboradas desde 1943, que finalmente estuvo formada por 12 regiones o Juntas de Gas de Área, supervisadas por una autoridad central, denominada *Gas Council*. Este nuevo organismo, aunque previsto para actuar en estrecha colaboración con el Ministerio, estuvo dotado de un grado significativo de autonomía (GJ, 28/01/1948).

A diferencia de la actitud pragmática adoptada por gran parte del empresariado, el Partido Conservador expresó una firme oposición al proyecto de nacionalización en el parlamento. Sin embargo, su limitada representación en la Cámara de los Comunes impidió que su postura tuviera un impacto decisivo. El proyecto fue aprobado en febrero de 1948 por 354 votos a favor y 179 en contra, entrando en vigor en mayo de 1949 (Kelf-Cohen, 1973).

Resuelta la estructura de la industria nacionalizada, Hugh Gaitskell, nuevo ministro de Combustible y Energía, fue responsable del nombramiento de los ejecutivos que debían formar el organigrama. A.E. Sylvester, empresario que mostró en todo momento una actitud conciliadora y que gozaba de un gran prestigio en el sector, fue nombrado presidente del *Gas Council* con un sueldo anual de 6.000 libras. La vicepresidencia recayó, con un sueldo de 5.000 libras, en el coronel Smith. Este había sido presidente de la *Institution of Gas Engineers*, director general de la *Tottenham and District Gas Company* y presidente interino del *British Gas Council* (GJ, 22/01/1947; 21/04/1948).

Al frente de las Juntas de Gas de Área, de 12 directivos, 7 fueron destacados miembros del sector, mientras que los otros 5 fueron reputados científicos, empresarios o funcionarios con experiencia de gestión comercial, administrativa o colonial. De los gasistas, destacó al frente de la Junta de Gas del Norte del Támesis Michael Milne-Watson, quien había sido gobernador de la *Gas Light and Coke Company* y que representó cierta continuidad en la dirección técnica y estratégica de la industria del gas a pesar del cambio de propiedad.

Junto a Milne-Watson, otros nombramientos reforzaron el perfil profesional del nuevo entramado institucional. E. Crowther, asignado a la Junta del Norte, había sido presidente de la *Institution of Gas Engineers* y ocupaba el cargo de ingeniero jefe en la *Newcastle-upon-Tyne and Gateshead Gas Company*. W. Moncrieff Carr, al frente de la Junta del Noroeste, era cofundador de la *United Kingdom Gas Corporation* y había presidido la *Institution of Gas Engineers* en 1935. Henry F. H. Jones, encargado de la Junta de Midlands del Este, había sido director de varias compañías, entre ellas la *South Metropolitan*. Por su parte, G. le B. Diamond era director de la Compañía de Gas de Rochester y había participado en el Ministerio de Combustible y Energía desde 1942. W.K. Hutchison, responsable de la Junta del Sureste, era director gerente de la *Gas and Light Coke Company* y un reconocido investigador. Finalmente, C.H. Chester, de la Junta de Gas del Suroeste, fue vicepresidente sénior de la *Institution of Gas Engineers* y director de la compañía de Swindon.

4.2. Francia

En Reino Unido, pese al contexto bélico, la estabilidad política permitió un amplio debate sobre el futuro del sector gasista, centrado en su reforma y eficiencia. A la actividad del sector durante la guerra se sumó, desde 1944, la intervención estatal con el informe Heyworth y la acción del gobierno laborista. La nacionalización, concretada en 1948, transformó progresivamente la industria y mantuvo activo el debate sectorial hasta tres años después del conflicto. Este proceso generó una abundante literatura que ha ayudado a entender cómo el sector afrontó el cambio.

Como se analizará en este epígrafe, la situación en Francia fue muy diferente. La invasión alemana de 1940 redujo la soberanía francesa al sureste, bajo el régimen de Vichy, autoritario y colaboracionista. En 1942, Alemania ocupó todo el país. En este contexto, la reorganización del sector gasista quedó supeditada a las exigencias de las autoridades de ocupación, que impusieron un fuerte intervencionismo orientado a reestructurar la industria según sus intereses militares (Margairaz y Rouso, 1992). Las publicaciones especializadas, espacio clave de intercambio profesional, se redujeron notablemente. Francia, con una rica tradición editorial gasista desde el siglo XIX, conservó tras la Segunda Guerra Mundial solo el *Journal des Usines à Gaz* (Fernández-Paradas et al., 2025). Esta publicación sufrió interrupciones significativas durante varios meses en 1940, 1944 y 1945. Además, su periodicidad se redujo, pasando de dos ediciones mensuales a una única publicación al mes. Por otra parte, si la nacionalización del gas en Reino Unido se desarrolló tras tres años de preparación, en Francia dicho proceso ocurrió con relativa rapidez entre agosto de 1944 y abril de 1946. Por lo tanto, desde un punto de vista cuantitativo, es posible anticipar que la revista especializada francesa ofrece un menor volumen de información.

La nacionalización de la energía en Francia fue ante todo el cumplimiento de un compromiso adquirido por las fuerzas de la Resistencia unidas contra la ocupación (Colombo, 1961). El *Conseil National de la Résistance* (CNR) había identificado las nacionalizaciones como medidas fundamentales para desmantelar el poder de las élites económicas que habían colaborado con el régimen de Vichy y los alemanes. Tras la guerra, existía un consenso social amplio en que ciertos sectores estratégicos debían pasar a manos de la nación, tanto para castigar posibles colaboraciones como para evitar que intereses privados entorpecieran la reconstrucción. La propiedad pública de la industria energética se convirtió así en símbolo de la soberanía recuperada. El gobierno provisional de posguerra, cuyos principales partidos políticos fueron del democristiano MRP (Movimiento Republicano Popular), el socialista SFIO (Sección Francesa de la Internacional Obrera) y el comunista, tenía un mandato explícito de llevar a cabo estos cambios (Cumbers, 2019; Andrieu, 1997). Políticamente, la nacionalización tuvo un respaldo transversal, si bien

existieron amplias diferencias en la forma de acometerla entre los distintos partidos y sindicatos que prolongaron durante un año la promulgación de la ley y que han sido estudiados en profundidad por Picard *et al.* (1985), aunque de forma colateral a la electricidad, sector que se nacionalizó juntamente con el gas.

Las propuestas de la nacionalización del gas fueron variadas y objeto de un pugilato entre las facciones políticas. Los primeros proyectos planteados por Ernest Lacoste no preveían una nacionalización completa del sector eléctrico y gasista, en tanto que el objeto de estatización sería la producción y no la distribución de las fuentes de energía. Por parte de la *Confédération Générale de Travail* (CGT) y Pierre Le Brun, presidente de la *Union des Ingénieurs et Techniciens Français* (UNITEC), se formó un influyente grupo de trabajo por el que el CNR adoptó un proyecto que abogaba por la nacionalización en un ente conjunto del gas y la electricidad, que incluía la producción, el transporte y la mayoría de la distribución, además de mantener cierta descentralización territorial (*Presse française associée: bulletin économique et financier*, 03/08/1945; Andrieu, 1997). No obstante, desde el propio CNR, a iniciativa de los socialistas, se elaboraron nuevas propuestas tendentes a una mayor libertad de la iniciativa privada y municipal. En la Asamblea Consultiva Provisional de agosto de 1945 se discutió sobre ambos proyectos, decantándose por el de la CGT. En octubre, el nuevo gobierno presidido por De Gaulle otorgó la cartera de Producción Industrial al comunista Marcel Paul, quien finalmente sería el encargado de ejecutar la promesa del CNR. No obstante, los debates parlamentarios continuaron. Frente a la propuesta de nacionalización integral de los comunistas, los socialistas defendieron la continuidad de las empresas municipalizadas existentes, mientras que los democristianos plantearon la creación de una sociedad mixta en la que el Estado asumiera el 51 % del capital. Desde el punto de vista empresarial, en el ámbito de la electricidad, la defensa de sus intereses fue limitada y representantes notorios del sector, como Ernest Mercier, acusado de antidemócrata, se mantuvieron alejados del epicentro del debate. Finalmente, el proyecto definitivo de ley se presentó en marzo de 1946, y a pesar de una calurosa discusión y de un centenar de enmiendas, fue aprobado por una gran mayoría y promulgado el 8 de abril de 1946 (Picard *et al.* 1985). 615 explotaciones pertenecientes a 127 sociedades fueron nacionalizadas. No obstante, al cargo de *Gaz de France*, el nuevo organismo público encargado de la gestión del servicio, tan solo fueron transferidas 8 empresas, pues todas aquellas que explotaban conjuntamente electricidad y gas fueron absorbidas por *Électricité de France*. Al margen de la nacionalización quedaron, inicialmente, las compañías municipales de gas manufacturado y las empresas de gas natural (Beltran, 1992; Fernandez, 2017).

Nuestra hipótesis inicial planteaba la existencia de un paralelismo entre el debate político, reflejado en las actas de la Asamblea Nacional, y el debate empresarial, expresado en la prensa especializada, tal como se ha documentado en Reino Unido. Sin embargo, en los primeros números publicados tras la Liberación, el *Journal des Usines à Gaz*, que tradicionalmente había ejercido como plataforma de defensa de los intereses sectoriales frente a otros sectores energéticos competidores y ante iniciativas gubernamentales, mostró una actitud distinta a la esperada. Contrariamente a lo que podría anticiparse según su línea editorial histórica, la publicación no expresó una oposición activa al proceso de nacionalización. Por el contrario, manifestó explícitamente su decisión de abstenerse de realizar comentarios sobre el desarrollo político en curso, optando en cambio por centrar su atención en el análisis de aspectos técnicos y empresariales corrientes (JUG, 15/04/1945).

El silencio de la prensa especializada contrasta con el de la prensa generalista. Desde el punto de vista sindical, comunista o socialista, múltiples publicaciones como *L'Humanité*, *Le Peuple*, *L'Éclaireur de l'Ain*, *Le Populaire* o *La Femme dans la Vie Sociale* fueron proliferas en la publicación de artículos y editoriales en defensa de las nacionalizaciones, e incluso, combativos con las propuestas que abogaban por permitir cierta cuota de actividad privada. En ellos se desarrollaron argumentos a su favor, defendiéndolas desde un punto de vista técnico, y en lo referente al gas, como la solución al estancamiento del sector. Pero, sobre todo, predominó el argumentario "antitrust", acusando a los altos empresarios de "saqueadores acostumbrados a enriquecerse despreciando todo el interés nacional" (*L'Éclaireur de l'Ain*, 17/03/1945). Este argumento, aunque

expresado con crudeza, no era ajeno al ideario político de las fuerzas predominantes, pues en la Carta de la Resistencia aparecía de forma similar la promesa de retornar a la nación de los grandes medios de producción monopolizados, fruto del trabajo común, de las fuentes de energía, de las riquezas del subsuelo, de las compañías de seguros y de los grandes bancos (CNR, 1944). Junto con estas publicaciones, otros periódicos de corte tradicionalmente conservador, como *Le Figaro*, adoptaron una línea editorial a favor de la nacionalización, argumentando que las necesidades de la reconstrucción francesa superaban la capacidad de los particulares y necesitaba de un control riguroso (Le Figaro, 11/01/1945)

Por otro lado, en el momento de la promulgación de la Ley de 8 de abril de 1946, la revista se limitó a copiar un resumen de la disposición, absteniéndose de comentarlo críticamente (JUG, 15/04/1946). Surge así una pregunta central: ¿por qué los industriales del gas en Francia, a través de su principal órgano de expresión, no se opusieron de manera abierta, o participaron en el debate sobre el proceso de nacionalización tras la Segunda Guerra Mundial?

En virtud de la Ley del 15 de febrero de 1941, se estableció el Comité de Organización del Gas (C.O. Gaz). Este organismo fue presidido por Joseph Thuillier, figura destacada del Sindicato Profesional del Gas y administrador de la *Société Lyonnaise*. Entre sus miembros se encontraban altos representantes industriales, como Ernest Langrogne (vicepresidente de la *Compagnie du Gaz de Paris*), Lebon (Sociedad Lebon), Leclers (E.C.F.M.) y Tabourin (*Société industrielle de gaz et d'électricité*) (Williot, 2009). Durante el periodo de ocupación alemana, el C.O. Gaz actuó principalmente como un intermediario clave entre la administración francesa y las autoridades alemanas de ocupación. En este contexto, se llevaron a cabo diversas actividades oficiales entre ambos países, entre las que destacan el congreso franco-alemán sobre energía celebrado en julio de 1941 y un viaje oficial del Comité a Alemania en junio del mismo año, que incluyó reuniones con autoridades alemanas de alto nivel, tanto político como técnico. Tras la Liberación, estas iniciativas fueron reinterpretadas por la opinión pública como posibles pruebas de colaboracionismo, aunque las motivaciones que guiaron la participación de los industriales franceses no siempre respondían a una adhesión ideológica explícita, sino más bien a una estrategia de supervivencia sectorial en un contexto complejo. No obstante, el Comité y muchos de sus integrantes pasaron a estar bajo sospecha pública debido a sus vínculos institucionales con las autoridades alemanas (Mougin, 1966).

La *épuration* o depuración fue un proceso por el cual, tras agosto de 1944, se trató de identificar, juzgar, castigar y apartar de la vida pública a los individuos considerados cómplices de los alemanes o el régimen de Vichy. Durante sus primeros compases, sin que mediara cualquier institucionalización formal, se generó espontáneamente la llamada depuración social o salvaje. Facciones de población reprendieron sin garantías procesales a aquellos individuos que consideraron cercanos a los alemanes. En la práctica, se concretó con la humillación pública, con casos como el rapado de mujeres y ejecución sumaria de individuos señalados por traición. El gobierno provisional encauzó la represión por la vía legal, dando paso a un periodo de depuración institucionalizado. De un lado, la depuración política señaló a los colaboradores notorios con el régimen, de otro, la depuración profesional y administrativa buscó purgar de los servicios públicos a aquellas personas que habían demostrado alguna simpatía hacia Vichy o los ocupantes. Para ello, varias ordenanzas, como las de 26 de junio de 1944 o 16 de octubre de 1944, conformaron Comités Regionales Interprofesionales que se encargaron de examinar la conducta de patronos, directivos y empleados durante la ocupación. Posteriormente, una Comisión Nacional de Depuración fue creada por decreto en octubre de 1945 (Riondet, 2017). De forma aproximada, Rouquet (1992) estima que más de 28.000 personas fueron depuradas de la administración pública.

Desde los primeros momentos de la Liberación, se aplicaron medidas de requisición sobre diversas compañías. Son ampliamente conocidas las detenciones de Louis Renault y Marius Berliet, así como la confiscación y nacionalización, con carácter punitivo, de sus respectivas empresas, debido a su colaboración manifiesta con el régimen nazi. Por el mismo motivo, en el caso de la industria del gas, y antes de la nacionalización definitiva de 1946, el Estado procedió a la requisición preventiva de varias compañías. Entre los casos más significativos destacan los de

Marsella (Mencherini, 1992) y París, principales centros urbanos del país, donde las autoridades intervinieron directamente en la gestión de las empresas implicadas.

La historiografía contemporánea ha prestado escasa atención al proceso depurativo de la industria del gas entre 1944 y 1946. No obstante, una aproximación exploratoria indica un proceso profundo de investigación y sanción en todos los niveles del sector. En lo referente a los directivos, su participación en órganos colegiados creados ad hoc por las autoridades ocupantes, la continuidad en sus cargos directivos durante el régimen de Vichy y su presencia en actos públicos oficiales contribuyeron a alimentar las sospechas de colaboración.

Especialmente mediático fue el caso de la *Compagnie du Gaz de Paris*. En la capital, la comisión de depuración de la prefectura del Sena, que incluyó comités específicos para los servicios públicos de agua, electricidad, ferrocarril y gas, fue creada el 29 de agosto de 1944 (Riondet, 2017). En noviembre de ese año, las pesquisas sobre la Compañía de Gas demostraron una estrecha vinculación de Ernest Langrogne, vicepresidente y director general de *Gaz de Paris*, así como miembro del C.O. Gaz, con los nazis. En concreto, se descubrieron documentos que confirmaban la colaboración con la Gestapo y el desvío de fondos de la compañía, por un monto aproximado de 350.000 francos anuales, hacia el partido fascista *Rassemblement National Populaire* (RNP), a la milicia colaboracionista LVF (*Légion des volontaires français contre le bolchévisme*) y a multitud de periódicos pronazis, entre ellos, *Le Petit Parisien*. Por todo ello, fue arrestado el 7 de octubre de 1944 y, finalmente, condenado en mayo de 1945 a la confiscación de sus bienes y a la pena de *indignité nationale*. Esta sanción implicaba la degradación de la condición ciudadana del condenado, privándolo de derechos fundamentales como el sufragio y el acceso a funciones públicas, entre otros (L'Humanité, 24/11/1944, 21/05/1946; Bernier, 2018; Collombat y Servenay, 2014).

Junto con este caso, las autoridades parisinas abrieron más de 2.000 expedientes de investigación. En sus memorias, Pierre Mougin (1966: 354) subrayó la parcialidad de algunos comités de depuración, señalando su instrumentalización contra empresarios impopulares entre los delegados sindicales y calificando su proceder como marcadamente punitivo y arbitrario.

En total, a través del *Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris*, hemos podido contabilizar 98 sanciones a miembros de la *Compagnie du Gaz de Paris* desde octubre de 1944 a diciembre de 1945. A excepción de Langrogne, no se condenó a ningún otro alto directivo, siendo el resto pertenecientes a puestos bajos y medios del organigrama empresarial. Las medidas disciplinarias adoptadas fueron diversas, incluyendo amonestaciones, degradaciones laborales, suspensiones temporales y despidos. En cuanto a las motivaciones, estas abarcaron una amplia gama de conductas asociadas al colaboracionismo, tales como la afiliación a partidos fascistas, la participación en actividades de propaganda proalemana, el trabajo voluntario en Alemania o la manifestación de una actitud favorable hacia el régimen de Vichy.

Además del trabajo desarrollado por las instancias competentes, la prensa generalista, y en particular la de orientación socialista o comunista, desempeñó un papel activo en la exigencia de un mayor alcance y profundidad en las investigaciones. El diario *L'Humanité* (24/11/1944), por ejemplo, dirigió sus críticas especialmente contra Alexandre Celier, persona que había favorecido el medro de Langrogne durante la ocupación. Celier no solo presidía la *Compagnie Parisienne*, sino que también ocupaba cargos clave como la presidencia del *Comptoir d'Escompte* y formaba parte de los consejos de administración de entidades financieras de gran relevancia, tales como el Banco de Argelia, el Crédito Nacional y el Banco de Indochina. A pesar de ello, no detectó, o no denunció, los desvíos de fondos cometidos dentro de la compañía de gas bajo su presidencia. No obstante, las autoridades pertinentes no encontraron motivos manifiestos para procesarle. De hecho, durante la ocupación, Alexandre Celier fue objeto de sospecha por las autoridades alemanas por posible adversidad al Reich, y su hijo, arrestado por complicidad con el enemigo (Lacroix-Riz, 2013).

Los estudios sobre la depuración han señalado la poca contundencia que tuvo sobre los altos directivos empresariales, más allá de la condena de personalidades que sirviera como castigo ejemplar. Además, incluso en los casos en que se aplicaron sanciones, su impacto fue posteriormente atenuado por las medidas de amnistía establecidas por las leyes n.º 51-18 del 5 de enero

de 1951 y n.º 53-681 del 6 de agosto de 1953. Estas disposiciones permitieron la conmutación de las penas vinculadas a la *indignité nationale* y a otros delitos relacionados con la colaboración. Como resultado, el alcance real de las sanciones impuestas en el marco de la depuración ha tendido a considerarse limitado (Joly, 2008). Pero, a pesar de la limitada eficacia jurídica de la depuración patronal, en el contexto inmediato de la Liberación, la amenaza de la purga tuvo un peso simbólico y político considerable. La posibilidad de ser investigado, sancionado o, al menos, públicamente señalado, constituyó una presión real sobre los dirigentes empresariales. Esta presión se vio reforzada por la campaña mediática sostenida por amplios sectores de la prensa y de la opinión pública, que exigían responsabilidades a quienes se habían comprometido, de manera activa o pasiva, con el régimen de Vichy o con el ocupante alemán. El discurso de denuncia hacia las élites económicas colaboracionistas, aunque muchas veces no se tradujera en sanciones efectivas, alimentó un clima de desconfianza e inestabilidad, donde la legitimidad del personal dirigente fue ampliamente cuestionada. Por lo tanto, en este contexto, la amenaza de la depuración, el clima de vigilancia pública y mediática, así como la hegemonía política de las fuerzas surgidas de la Resistencia, actuaron de manera combinada como factores disuasorios potencialmente eficaces frente a cualquier intento de oposición abierta al proceso de nacionalización. En particular, estos elementos pueden ayudar a explicar la ausencia de una campaña pública articulada por parte de la *Société Technique de l'Industrie du Gaz* a través de su órgano de expresión, el *Journal des Usines à Gaz*.

5. Conclusiones

Este estudio comparativo ha evidenciado cómo las nacionalizaciones de la industria del gas en el Reino Unido y Francia tras la Segunda Guerra Mundial suscitaron reacciones distintas en la prensa especializada de cada país. En el Reino Unido, el *Gas Journal* se posicionó como un foro de debate abierto sobre la nacionalización, mientras que en Francia el *Journal des Usines à Gaz* mantuvo un llamativo silencio editorial al respecto. Esta divergencia puede deberse a los diferentes contextos políticos de cada país al fin de la conflagración, los cuales condicionaron la capacidad del sector gasista para expresar o reservar sus posiciones frente a la intervención estatal.

En el caso británico, la prensa profesional y las organizaciones del sector jugaron un papel activo en la discusión pública del proyecto nacionalizador. El *Gas Journal* publicó editoriales prudentes, pero dio cabida también a numerosas cartas, análisis y propuestas que manifestaban inquietud y rechazo ante la perspectiva de la estatización. Voces técnicas acreditadas plantearon alternativas con el fin de influir en el diseño final de la reforma, como esquemas de integración regional, siendo la más relevante un informe de la BGF de 1943. Tras la publicación del informe Heyworth, las empresas gasistas se unieron en el *British Gas Council* para coordinar una respuesta común e intentar negociar con el gobierno laborista. Esta oposición organizada no logró frenar la aprobación del *Gas Act* de 1948; sin embargo, consiguió que algunas de sus demandas se reflejaran en el modelo adoptado y que altos cargos del sector continuaran en el nuevo ente público.

En Francia, por el contrario, el principal órgano de prensa del sector evitó articular públicamente cualquier oposición a la nacionalización de 1946. Pese a su tradición de defensa gremial, el *Journal des Usines à Gaz* decidió no comentar las medidas legislativas. Incluso cuando se promulgó la Ley del 8 de abril de 1946, la revista se limitó a reseñar el contenido de la norma sin añadir crítica ni debate. Este silencio resultó más notable en contraste con la prensa general francesa, que apoyó con entusiasmo la nacionalización y denunció a las antiguas compañías gasistas por su monopolio y por desatender el interés nacional. Una aproximación a las posibles causas de este silencio editorial parece indicar la relevancia del contexto político de la posguerra. Tras la Liberación, las élites industriales quedaron bajo sospecha por sus vínculos con el régimen de Vichy y con las autoridades de ocupación nazis. Los procesos de depuración investigaron y sancionaron a directivos acusados de colaboracionismo, lo que desacreditó a buena parte de los altos cargos empresariales. En el ramo del gas, la expropiación de varias compañías en el país, la condena de Langrogne, y la investigación sistemática a directivos y empleados pudo funcionar

como un elemento disuasorio para cualquier campaña activa contra el programa de la Resistencia, el cual gozaba de un gran apoyo político y social.

En definitiva, el estudio de ambos casos confirma la relevancia de las publicaciones especializadas como fuente para comprender la perspectiva empresarial ante eventos políticos, económicos o sociales. Tanto el contenido explícito del *Gas Journal* como los silencios del *Journal des Usines à Gaz* ofrecen información valiosa sobre las corrientes de opinión del sector, su capacidad organizativa, las presiones que ejercieron y soportaron, así como los logros o limitaciones de sus acciones.

6. Referencias bibliográficas

- Andrieu, Claire (1997): "Du programme du Conseil national de la Résistance à la nationalisation du gaz et de l'électricité 1943-1946", *Bulletin d'histoire de l'électricité*, (29), pp. 139-147. <https://doi.org/10.3406/helec.1997.1531>
- Aróstegui Sánchez, Julio (2001): *La investigación histórica: teoría y método*, Barcelona, Crítica.
- Beltran, Alain (1992): "Gaz de France et le secteur gazier depuis 1940", *Flux. Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires*, (8), pp. 29-38. <https://doi.org/10.3406/flux.1992.924>
- Beltran, Alain y Jean Pierre Williot (1992): *Le noir et le bleu. 40 ans d'histoire de Gaz de France*, París, Pierre Belfond.
- Beltran, Alain y Jean-Pierre Williot (2009): *Gaz. Du gaz en France à Gaz de France, deux siècles de culture gazière*, Le Cherche-Midi, París.
- Bernier, Aurélien (2018): *Les voleurs d'énergie. Accaparement et privatisation de l'électricité, du gaz, du pétrole*, París, Utopia.
- Bret, Patrice, Konstantinos Chatzis y Liliane Pérez (2008): *La presse et les périodiques techniques en Europe 1750-1950*, París, L'Harmattan.
- Cardoso de Matos, Ana, Alexandre Fernandez y Carlos Larrinaga (2024): "Los límites de la municipalización del gas en tres países de la Europa Latina (1919-1945): España, Portugal y Francia", *Vegueta Anuario de la Facultad de Geografía e Historia*, 24 (1), pp. 41-63. <https://doi.org/10.51349/veg.2024.1.03>
- Collombat, Benoît y David Servenay, dirs. (2014): *Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours*, París, Éditions La Découverte.
- Colombo, Luigi (1961): *La nazionalizzazione dell'industria elettrica e del gas in Gran Bretagna e in Francia*, Milán, Doot. A. Giuffrè Editore.
- Conseil National de la Résistance (1944): *Les jours heureux. Programme du Conseil national de la Résistance*, Disponible en web: https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Jours_Heureux,_programme_d%E2%80%99action_de_la_R%C3%A9sistance [Consulta: 26 de mayo de 2025]
- Cumbers, Andrew (2019): "A tale of two nationalisations: experiences of post 1945 public ownership in the UK and France compared", *International Journal of Public Policy*, 15(1/2), pp. 5-20. <http://dx.doi.org/10.1504/IJPP.2019.099047>
- Daunton, Martin (2008): *State and Market in Victorian Britain. War, Welfare and Capitalism*, Woodbridge, The Boydell Press.
- Fari, Simone (2015). *Victorian Telegraphy Before Nationalization*, Londres, Palgrave Macmillan.
- Fernandez, Alexandre (2017): "La politique du gaz en France, 1946-2004", en Isabel Bartolomé Rodríguez, Mercedes Fernández-Paradas, Jesús Mirás Araujo, eds., *Globalización, nacionalización y liberalización de la industria del gas en la Europa Latina (siglos XIX-XXI)*, Madrid, Marcial Pons, pp. 97-112.
- Fernandez, Alexandre (2021): "Suministrar gas y electricidad a las ciudades francesas antes de la ley de nacionalización de 1946", *Ayer Revista De Historia Contemporánea*, 122 (2), pp. 21-42. <https://doi.org/10.55509/ayer/122-2021-02>
- Fernández-Paradas, Antonio Rafael, Florentino Moyano Jiménez y Nuria Rodríguez-Martín (2024): "Las estrategias publicitarias y comerciales de las empresas de gas y electricidad en Francia y España (1890-1918)", *Vegueta Anuario de la Facultad de Geografía e Historia*, 24 (1), pp. 97-127. <https://doi.org/10.51349/veg.2024.1.05>

- Fernández-Paradas, Mercedes y Carles Sudrià (2018): "La transición de la industria del gas de carbón al gas natural: dos modelos, España y Cataluña", *Revista de Historia Industrial*, (71), pp. 121-149.
- Fernández-Paradas, Mercedes y José Joaquín Luque García (2023): "The role of the technical press in the diffusion of gas in Europe: The case of Le Gaz Journal (1857-1886)", en Ana Cardoso de Matos, Alexandre Fernandez y Anotnio Jesús Pinto Tortosa, eds., *The gas sector in Latin Europe's industrial History: Lighting and heating the world*, Cham, Springer, pp. 69-84.
- Fernández-Paradas, Mercedes, Alberte Martínez-López y Jesús Mirás-Araujo (2023): "The impact of World War II on the gas production in Latin Europe", en Ana Cardoso de Matos, Alexandre Fernandez y Anotnio Jesús Pinto Tortosa, eds., *The gas sector in Latin Europe's industrial History: Lighting and heating the world*, Cham, Springer, pp. 135-146.
- Fernández-Paradas, Mercedes, Alberte Martínez-López y Jesús Mirás-Araujo (2025): "How did the Second World War affect gas consumption in Western Europe?", en Alberte Martínez-López, Jesús Mirás-Araujo y Nuria Rodríguez-Martin, eds., *Economic History of the European energy industry. Lighting up Western Europe, 19th to 21st centuries*, Londres, Routledge, pp. 28-40.
- Fernández-Paradas, Mercedes, Israel David Medina Ruiz y Antonio Jesús Pinto Tortosa (2025): "Las revistas especializadas en gas en Europa: el ejemplo del Journal des Usines à Gaz 1877-1945", *Rubrica contemporánea*, 14(29), pp. 135-154. <https://doi.org/10.5565/rev/rubrica.396>
- Giuntini, Andrea y Jean-Pierre Williot (2023): "Gas versus electricity in Paris and Rome, from late nineteenth century until the Second World War", en Ana Cardoso de Matos, Alexandre Fernandez y Anotnio Jesús Pinto Tortosa, eds., *The gas sector in Latin Europe's industrial History: Lighting and heating the world*, Cham, Springer, pp. 87-100.
- Hannah, Leslie (1979): *Electricity before nationalisation*, Londres, Palgrave Macmillan.
- Hernández Ramos, Pablo (2016): Consideración teórica sobre la prensa como fuente historiográfica, *Historia y Comunicación Social*, 14(2), pp. 465-477. <https://doi.org/10.5209/HICS.57855>
- Jeanneney, Jean-Marcel (1954): "Nationalization in France", en Edward H. Chamberlin, ed., *Monopoly and competition and their regulation*, Londres, Palgrave Macmillan, pp. 471-492. https://doi.org/10.1007/978-1-349-08434-0_24
- Johnson, Paul (2010): *Making the Market. Victorian Origins of Corporate Capitalism*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Joly, Hervé (2008): "Mobilités patronales dans l'après-guerre et impact de l'épuration", en Marc Bergère, ed., *L'Épuration économique en France et à la Libération*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 83-100. <https://doi.org/10.4000/books.pur.4772>.
- Katzarov, Konstantin (1964): *The theory of nationalisation*, La Haya, Martinus Nijhoff.
- Kelf-Cohen, R. (1973): *British Nationalisation 1945-1973*, Londres, Palgrave Macmillan.
- Lacroix-Riz, Annie (2013): *Industriels et banquiers français sous l'occupation*, París, Armand Colin.
- Magaldi, Nuria (2010): "Los orígenes de la municipalización de servicios. El industrialismo público inglés (Municipal Trading) y la Sociedad Fabiana", *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, (313-314), pp. 11-53. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=576461202007> [Último acceso 11 noviembre 2025]
- Margairaz, Muchel y Henry Roussio (1992): "Vichy, la guerre et les entreprises", *Histoire, économie et société*, 11 (3), pp. 337-367. <https://doi.org/10.3406/hes.1992.1638>
- Martínez-López, Alberte y Jesús Mirás Araujo (2024): "La difusión del gas en la Europa latina en vísperas de la Primera Guerra Mundial", *Vegueta Anuario de la Facultad de Geografía e Historia*, 24 (1), pp. 13-39. <https://doi.org/10.51349/veg.2024.1.02>
- Martykánová, Darina (2007): "Por los caminos del progreso. El universo ideológico de los ingenieros de caminos españoles a través de la Revista de Obras Públicas (1853-1899)", *Ayer*, 68 (4), pp. 193-219. Disponible en: <https://www.revistasmarcialpons.es/revistaayer/article/view/Martykanova-universo-ideologico-ingenieros-caminos-espanoles-rev> [Último acceso 11 noviembre 2025]

- Matés Barco, Juan Manuel (2017): "La regulación de los servicios públicos de gas y agua en Gran Bretaña (1800-1914)", en Isabel Bartolomé Rodríguez, Mercedes Fernández-Paradas, Jesús Mirás Araujo, eds., *Globalización, nacionalización y liberalización de la industria del gas en la Europa Latina (siglos XIX-XXI)*, Madrid, Marcial Pons, pp. 45-74.
- Mencherini, Robert (1992): "Un enjeu de pouvoir à la Libération : les entreprises réquisitionnées sous « gestion ouvrière » à Marseille (1944-1948)", *Annales du Midi revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale*, 104 (199-200), pp. 429-440. <https://doi.org/10.3406/anami.1992.3749>
- Millward, Robert (1997): "The 1940s nationalizations in Britain: means to an end or the means of production?", *Economic History Review*, L (2), pp. 209-234. <https://doi.org/10.1111/1468-0289.00052>
- Millward, Robert (2005): *Private and Public Enterprise in Europe*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mosca, Manuela (2008): "On the origins of the concept of natural monopoly: Economies of scale and competition", *Journal History of Economic Thought*, 15 (2), pp. 317-353. <https://doi.org/10.1080/09672560802037623>
- Mougin, Pierre (1966): *Mémoires*. Laval, Imprimerie Barnéoud.
- Picard, Jean-François, Alain Beltran y Martine Bungener (1985): *Histoires de l'EDF. Comment se sont prises les décisions de 1946 à nos jours*, Paris, Dunod.
- Political and Economic Planning (1939): *Report on the gas industry in Great Britain*, Londres.
- Riondet, Charles (2017): *Le Comité parisien de la Libération*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- Rosanvallon, Pierre (1981): "L'idée de nationalisation dans la culture politique française", *Le Debat*, (17), pp. 6-14. Disponible en: <https://shs.cairn.info/revue-le-debat-1981-10-page-5?lang=fr&tab=feuilleter> [Último acceso 23 mayo 2025]
- Rouquet, François (1992): "L'épuration administrative en France après la libération. Une analyse statistique et géographique", *Vingtième Siècle, revue d'histoire*, (33), pp. 106-117. <https://doi.org/10.3406/xxs.1992.2492>
- Sáiz García, María Dolores (1996): "Nuevas fuentes historiográficas", *Historia y comunicación social*, (1), pp. 131-144. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/HICS9696110131A> [Último acceso 23 mayo 2025]
- Thomas, Russel (2018): "The development of the manufactured gas industry in Europe", en J. Craig, F. Gerali, F. MacAulay y R. Sorkhabi, *History of the European oil and gas industry*, Londres, Geological Society of London, 465. <https://doi.org/10.1144/SP465.14>
- Tōyama, Yoshihiro (1977): "The origins of nationalization in Britain (IV)", *Otemon Economic Studies*, (10), pp. 1-29
- Williams, Trevor Illtyd (1981): *A History of the British Gas Industry*, Oxford, Oxford University Press.
- Williot, Jean-Pierre (1999): *Naissance d'un service public: Le Gaz à Paris*, Paris, Éditions Rive Droite.
- Williot, Jean-Pierre (2005): "De la naissance des compagnies à la constitution des groupes gaziers en France", en Serge Paquier y Jean-Pierre Williot, dir., *L'histoire du gaz en Europe aux XIXe et XXe siècles*, Bruselas, Peter Lang, pp. 147-180.
- Williot, Jean-Pierre (2009): "Les entreprises gazières françaises et l'État : Les logiques de décision de la tutelle publique", en Alain Beltran, Christophe Bouneau, Yves Bouvier, Denis Varaschin y Jean-Pierre Williot, eds., *État et énergie XIXe-XXe siècle*, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, pp. 43-56. <https://doi.org/10.4000/books.igpde.6486>
- Wilson, John F. (1995): "The motives for gas nationalisation: practicality or ideology?", en Robert Millward y John Singleton, eds., *The political economy of nationalisation in Britain 1920-1950*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 144-163.